

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Patricia Reyes Rivera y Marta Martín Llaguno Diputadas del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente **pregunta con respuesta por escrito a la Vicepresidenta del Gobierno sobre las medidas que va a tomar para preservar la libertad de expresión y de cátedra ante la incapacidad de garantizar la seguridad en los debates, en concreto sobre prostitución o gestación por sustitución.**

Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2019

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con lo publicado en diversos medios de comunicación, tales como “eldiario.es”, “La Voz de Galicia”, “La Vanguardia” o “elespanol.com”, los próximos 19 y 20 de septiembre se iban a celebrar unas jornadas sobre prostitución en la Facultad de Sociología de la Universidad de A Coruña organizadas por María Martínez Cano en el marco de un máster en políticas sociales e intervención sociocomunitaria. Ante las amenazas y presiones alentadas por colectivos autodenominados feministas, la universidad emitió un comunicado informando de que no podía “garantir a seguridade do debate nin a súa calidade académica” y por tanto suspendía las jornadas. Entre esas presiones públicas, desafortunadamente nos encontramos con las de la mismísima Secretaria de Estado de Igualdad en funciones, D^a Soledad Murillo, que a través de la red social twitter y etiquetando a la propia Universidad para que se diera por enterada, hacía las siguientes declaraciones con contenido erróneo, dicho sea de paso:

“La prostitución es una actividad ILÍCITA, se ejerza por quien lo ejerza, en el sector público o privado. Una vergüenza que una universidad pública @UDC_gal autorice esta materia ilegal. Máxime teniendo un curso referente de #feminismo @RosaCoboBedia.”

Poco después, como informaba La Voz de Galicia, “88 profesoras, catedráticas e investigadoras del ámbito académico nacional e internacional publicaron un manifiesto titulado Por el derecho a debatir en la Universidad y en todas partes, en el que alertan de la ‘grave vulneración del derecho a la libertad de expresión’ que supone la cancelación de las jornadas por parte de la UDC, que ‘hace peligrar la libertad de cátedra y de investigación consagradas en la Constitución’”.

Meses antes, la Universidad Carlos III organizó unas jornadas sobre gestación subrogada en el marco del V Congreso de Derecho Internacional Privado. Dicha Universidad se vio sometida a similares presiones, entre ellas también la de la alcaldesa de Getafe del PSOE, la cual, según

se publicó en “público.es”, manifestó lo siguiente: “He tenido la oportunidad de hablar con el rector para transmitirle que tanto desde el Gobierno Municipal, como desde las siglas que engloba el PSOE nos oponemos a los vientres de alquiler, porque entendemos que se trata de una comercialización del cuerpo de las mujeres y que de la misma forma que pasa con la prostitución, nuestra postura es abolicionista.”

A su vez, a través de redes sociales y por movimientos autodenominados feministas, tales como la Asamblea Abolicionista de Madrid, se convocó en la propia Universidad una cacerolada. Por ello, debido a tal revuelo, la Universidad decidió cerrar la página web que anunciaba el evento, sin llegar a cancelarlo.

Cuando la diputada que suscribe, Patricia Reyes, acudió a la mesa política que cerraba tales jornadas, se encontró con unos organizadores asustados ante un escrache-cacerolada y unos alumnos que no daban crédito a lo que estaba ocurriendo. Es más, a pesar de haber confirmado su asistencia, ningún representante del resto de partidos políticos se atrevió a acudir a la cita, con lo cual no pudo tener lugar el sano debate que cualquier democracia requiere.

En relación a lo anterior, se formulan las siguientes preguntas:

- ¿Considera la Vicepresidenta que cercenar la posibilidad de debate y la libertad de expresión en la universidad desde la propia institución es una práctica académica tolerable?
- ¿Comparte la Vicepresidenta estas prácticas llevadas a cabo por la Secretaria de Estado de Igualdad así como responsables institucionales del Partido Socialista?
- ¿Qué piensa hacer para garantizar la libertad de cátedra, la libertad de expresión y el debate sosegado en las instituciones de educación superior de este país?

Marta Martín Llaguno



Diputadas del Grupo Parlamentario Ciudadanos

Patricia Reyes Rivera

